



Asamblea General

Distr. general
18 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020*

Opinión núm. 41/2020, relativa a Husain Ali Hasan Khamis, Qasim Ahmed Ali Hasan al-Malki, Jawad Redha Ahmed Abdalnabi Ahmed al-Tarifi, Ali Husain Ahmed Salman Ahmed al-Aali, Hasan Ali Abdulla Hasan Salman Fateel, Ahmed Mohamed Hasan Merza Hasan Kadhém, Husain Ali Mohsen Ali Muhana, Mansoor Abdulwahed Hasan Mohamed al-Dolabi y Hasan Moosa Jaafar Mohamed Ali (Bahrein)**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 8 de abril de 2020 al Gobierno de Bahrein una comunicación relativa a Husain Ali Hasan Khamis, Qasim Ahmed Ali Hasan al-Malki, Jawad Redha Ahmed Abdalnabi Ahmed al-Tarifi, Ali Husain Ahmed Salman Ahmed al-Aali, Hasan Ali Abdulla Hasan Salman Fateel, Ahmed Mohamed Hasan Merza Hasan Kadhém, Husain Ali Mohsen Ali Muhana, Mansoor Abdulwahed Hasan Mohamed al-Dolabi y Hasan Moosa Jaafar Mohamed Ali. El Gobierno respondió a la comunicación el 19 de mayo de 2020. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18,

* La versión original del anexo del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

** Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. La fuente presenta los casos de nueve ciudadanos de Bahrein condenados el 16 de abril de 2019 por el Cuarto Tribunal Penal Superior al término de un juicio colectivo (véase el anexo).

5. Husain Ali Hasan Khamis tiene 32 años. El 23 de enero de 2018, el Sr. Khamis fue arrestado en su casa al amanecer en una incursión efectuada sin orden judicial por las fuerzas antidisturbios (muy probablemente el mando de la fuerza especial de seguridad, que es una fuerza paramilitar dependiente del Ministerio del Interior encargada de responder a los disturbios). El mando de la fuerza especial de seguridad estuvo acompañado por agentes de policía vestidos de civil y por agentes del organismo nacional de seguridad. Ninguno de los agentes dio ninguna razón para el arresto del Sr. Khamis. Entraron por la fuerza en su casa para arrestarlo y se apoderaron de su teléfono, dos computadoras portátiles y su pasaporte. Los agentes no proporcionaron ninguna orden para entrar en la casa ni para incautarse de dichos objetos.

6. Tras el arresto, la familia del Sr. Khamis no tuvo noticias suyas hasta el 26 de enero de 2018, cuando recibieron una breve llamada suya en la que les comunicaba que estaba detenido en las dependencias de la Dirección de Investigaciones Penales en Adliya y que necesitaba ropa limpia. Después de permanecer detenido durante tres días en dicho lugar, el Sr. Khamis fue trasladado a la prisión de Jau, dependiente de la Dirección, donde continuó detenido, con los ojos vendados, durante 42 días más. La fuente alega que los interrogadores del Sr. Khamis le impidieron consultar a su abogado mientras lo interrogaban, a pesar de su petición de recibir asesoramiento jurídico. Además, el Sr. Khamis fue objeto de amenazas contra su familia con las que se buscaba obligarlo a confesar. El 4 de marzo de 2018, el Sr. Khamis fue trasladado al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff (Dry Dock), momento en el que se le permitió ponerse en contacto con su familia. El Sr. Khamis estuvo detenido en ese lugar durante seis meses, tras lo que compareció ante la Fiscalía y permaneció detenido otros cuatro meses antes de ser llevado ante un tribunal.

7. Durante el juicio, las autoridades acusaron al Sr. Khamis de haberse unido a la filial de Hizbulah en Bahrein, lo que suscitó la objeción del Sr. Khamis, ya que no se le había investigado en relación con esos cargos. El Tribunal admitió la confesión forzada del Sr. Khamis como prueba en su contra y no le permitió impugnar ninguna de las pruebas reunidas en su contra ni presentar ninguna prueba en su defensa. El Sr. Khamis fue condenado a 10 años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la desnaturalización, y fue trasladado a la cárcel de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

8. Qasim Ahmed Ali Hasan al-Malki tiene 25 años. En la noche del 13 de marzo de 2017, unos hombres enmascarados vinculados al Ministerio del Interior hicieron una redada

en la casa de la familia del Sr. Al-Malki, a la que entraron por la fuerza. Registraron la casa sin presentar una orden ni mencionar el motivo del arresto y el registro. El Sr. Al-Malki no estaba presente. Más tarde ese día, los mismos agentes arrestaron al Sr. Al-Malki sin orden judicial en una redada efectuada en la casa de un familiar. Fue detenido en la Fiscalía para ser interrogado sin que se le diera una razón para el arresto.

9. La fuente informa de que la familia del Sr. Al-Malki se puso en contacto con varias personas de las fuerzas de seguridad vinculadas al Ministerio del Interior para preguntar sobre los cargos que se le imputaban. Inicialmente, se les dijo que los cargos en su contra se referían a una reunión ilegal, aunque las autoridades no proporcionaron pruebas ni fotos. Sin embargo, el Ministerio del Interior confirmó más tarde que el Sr. Al-Malki había sido acusado de unirse a una célula terrorista. El Ministerio del Interior también declaró que no tenían suficientes pruebas contra el Sr. Al-Malki y que lo liberarían en dos días. La fuente alega que la primera visita de la familia del Sr. Al-Malki tuvo lugar el 6 de abril de 2017, casi un mes después de su detención inicial. En esa ocasión, el Sr. Al-Malki negó toda relación con una célula terrorista o con el uso de teléfonos móviles y memorias USB que tuvieran pruebas inculpatorias. El Sr. Al-Malki también alegó que los agentes lo habían torturado desde su detención en la Dirección de Investigaciones Penales y habían amenazado con torturarlo más severamente si negaba los cargos. Después de dos meses en la Dirección de Investigaciones Penales, el Sr. Al-Malki fue trasladado al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff, donde estuvo detenido durante más de un año. Se le denegó la posibilidad de consultar a su abogado.

10. El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía acusó al Sr. Al-Malki de participar en el establecimiento de la filial de Hizbulah en Bahrein y de unirse a una célula terrorista. El Sr. Al-Malki no fue informado de los cargos hasta su primera audiencia ante un tribunal, el 3 de octubre de 2018. El Sr. Al-Malki nunca había sido interrogado sobre el caso relativo a la filial de Hizbulah en Bahrein y quedó estupefacto tras el veredicto. Su familia había recibido un auto de acusación en el que se afirmaba que el único cargo era el de haber asistido a un seminario, basado en la confesión de una persona anónima. En el auto no se mencionaba ninguna implicación con la filial de Hizbulah en Bahrein. El Sr. Al-Malki fue condenado a siete años de prisión y a su desnaturalización, y fue trasladado a la cárcel de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

11. Jawad Redha Ahmed Abdalnabi Ahmed al-Tarifi tiene 28 años. El 13 de diciembre de 2017, unos hombres vestidos de civil detuvieron al Sr. Al-Tarifi en su lugar de trabajo sin mandamiento ni explicación. Alrededor de la medianoche del mismo día, agentes enmascarados del mando de la fuerza especial de seguridad y de las fuerzas de inteligencia allanaron su casa y la registraron durante cinco horas sin proporcionar una orden o cualquier otra autorización para el registro. Esa misma noche, las autoridades hicieron una redada y registraron el domicilio de uno de los familiares del Sr. Al-Tarifi, que fue detenido por las fuerzas de seguridad y encarcelado durante 11 días.

12. La fuente informa de que el Sr. Al-Tarifi fue objeto de desaparición forzada durante dos días, pasados los cuales se le permitió llamar a su familia y solicitar que le enviaran ropa limpia a la Dirección de Investigaciones Penales. Tras ello, los funcionarios de la Dirección le impidieron recibir visitas. También denegaron al Sr. Al-Tarifi la posibilidad de consultar a su abogado durante su interrogatorio y antes del juicio. Supuestamente lo obligaron a confesar sometiéndolo a amenazas, malos tratos y tortura. El Sr. Al-Tarifi fue condenado a reclusión a perpetuidad, a una multa de 100.000 dinares y a la desnaturalización, y fue trasladado a la cárcel de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

13. Ali Husain Ahmed Salman Ahmed al-Aali tiene 27 años. El 26 de enero de 2017, agentes del mando de la fuerza especial de seguridad, junto con funcionarios del Ministerio del Interior y agentes vestidos de civil, allanaron la casa del Sr. Al-Aali. Registraron su apartamento sin dar ninguna razón ni mostrar ninguna orden y lo sacaron de la casa esposado. Después de su detención, el Sr. Al-Aali permaneció recluso en la Dirección de Investigaciones Penales durante 35 días. Los funcionarios de la Dirección supuestamente golpearon al Sr. Al-Aali en la cara, denigraron su religión y se dirigieron a él utilizando calumnias para lograr una confesión forzada. Como resultado de la tortura, el Sr. Al-Aali confesó que se había unido a un grupo de WhatsApp, pero no que se hubiera unido a un

grupo terrorista. Durante los interrogatorios se le denegó la posibilidad de consultar a un abogado. Muchos miembros del mismo grupo de WhatsApp también fueron arrestados y detenidos con él. El Sr. Al-Aali fue posteriormente trasladado al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff.

14. La fuente informa de que antes del juicio y durante su transcurso, el Sr. Al-Aali tuvo un acceso limitado a su abogado para preparar su defensa. En el juicio, el Tribunal no le permitió presentar pruebas ni impugnar las presentadas por la fiscalía, incluida su confesión forzada. El Sr. Al-Aali fue condenado a siete años de prisión y a su desnaturalización, y fue trasladado a la cárcel de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

15. Hasan Ali Abdulla Hasan Salman Fateel tiene 21 años. El 6 de febrero de 2018, agentes vestidos de civil, acompañados por funcionarios del Ministerio del Interior, el organismo nacional de seguridad y la Dirección de Investigaciones Penales, allanaron el domicilio familiar del Sr. Fateel sin una orden judicial. El Sr. Fateel no estaba presente en ese momento, pero una vez que regresó a su casa, los agentes lo arrestaron y se lo llevaron en un automóvil sin identificación sin dar ninguna razón para su arresto. Inmediatamente después del arresto del Sr. Fateel, los agentes supuestamente lo golpearon en sus “áreas sensibles” mientras lo interrogaban sobre los nombres de sus familiares durante unas dos horas.

16. Según la fuente, las autoridades llevaron al Sr. Fateel a la Dirección de Investigaciones Penales, donde estuvo desaparecido durante seis semanas. Se le permitió llamar a su familia una noche después de la medianoche antes de que el personal de la Dirección cortara abruptamente la llamada. El Sr. Fateel fue torturado por agentes de la Dirección mientras era interrogado con el fin de forzar una confesión. Posteriormente fue trasladado a la sección para menores de 21 años de la prisión de Jau (New Dry Dock), donde finalmente se le permitió llamar a su familia. Durante su estancia en la Dirección, las autoridades supuestamente le denegaron la posibilidad de consultar a un abogado y no lo llevaron ante un juez en un plazo de 48 horas. Tan solo se le presentó ante la Fiscalía, donde se le acusó de unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein, financiar dicha organización y poseer materiales ilegales. Su confesión, forzada mediante tortura, fue usada en su contra en el juicio. El Sr. Fateel también fue presuntamente trasladado con otras personas a una granja, donde unos agentes los fotografiaron con material sin especificar para utilizarlo como prueba. El Sr. Fateel fue condenado a reclusión a perpetuidad, a una multa de 100.000 dinares y a la desnaturalización, y trasladado a la sección juvenil de la prisión de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

17. Ahmed Mohamed Hasan Merza Hasan Kadhem tiene 28 años. El 14 de junio de 2015, agentes vestidos de civil vinculados a la Dirección de Investigaciones Penales y a la policía antidisturbios detuvieron al Sr. Kadhem en su casa sin una orden judicial, tras lo que lo llevaron a la Dirección, donde lo sometieron a malos tratos durante dos días para forzar una confesión. El Sr. Kadhem fue trasladado al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff y acusado de incendio intencionado, disturbios durante una reunión ilegal y elaboración de cócteles molotov.

18. El 20 de octubre de 2015, las autoridades liberaron al Sr. Kadhem después de que pagara una fianza de 200 dinares, a la espera de que se reanudara su juicio el 26 de abril de 2016. El Cuarto Tribunal Penal Superior lo condenó a cinco años de prisión. El 29 de julio de 2017, la Dirección de Investigaciones Penales volvió a detener al Sr. Kadhem en su casa a fin de que comenzara a cumplir su condena de cinco años, para lo que fue trasladado a la prisión de Jau. El Sr. Kadhem apeló su sentencia; el 19 de febrero de 2018, la condena se redujo a tres años de prisión. El 29 de agosto de 2018, el Sr. Kadhem fue transferido a la Fiscalía, donde se le acusó de pertenecer a la filial de Hizbulah en Bahrein. El Sr. Kadhem negó todos los cargos, tras lo que fue juzgado en rebeldía, ya que a pesar de haber sido trasladado al tribunal desde la prisión de Jau, lo mantuvieron retenido en el autobús durante el proceso. El Sr. Kadhem fue condenado a siete años de prisión y a su desnaturalización, y fue trasladado a la cárcel de Jau. Su condena fue confirmada en apelación.

19. Husain Ali Mohsen Ali Muhana tiene 24 años. En el verano de 2016, mientras el Sr. Muhana se sometía a una cirugía ocular, agentes de la Dirección de Investigaciones Penales allanaron varias veces la casa de su familia. Los agentes registraron las posesiones

del Sr. Muhana, incluidas sus computadoras, pero aparentemente no encontraron nada. El 10 de diciembre de 2016, las autoridades llevaron a cabo otra redada en el domicilio familiar del Sr. Muhana, sin presentar una orden judicial ni dar ninguna explicación. El Sr. Muhana se escondió y las autoridades le dispararon en un incidente en el que logró evitar el arresto. Entre el 10 de diciembre de 2016 y el 14 de diciembre de 2017, el Sr. Muhana permaneció oculto; en ese período, las autoridades registraron dos veces el domicilio familiar. Entretanto, su familia contrató a un abogado, que averiguó que se había acusado al Sr. Muhana de incitación a asesinar a un agente de policía. El 14 de diciembre de 2017, funcionarios del Ministerio del Interior y de la Dirección de Investigaciones Penales y la policía antidisturbios persiguieron y detuvieron al Sr. Muhana sin una orden judicial en Bilad al-Qadeem.

20. La fuente informa de que, tras su detención, el Sr. Muhana fue interrogado en la Dirección de Investigaciones Penales durante 40 días sin abogado. Durante el interrogatorio del Sr. Muhana, los agentes lo golpearon e insultaron y denigraron su religión con el fin de lograr una confesión forzada. Además del cargo inicial de incitación al asesinato, el Sr. Muhana fue acusado de múltiples delitos, entre ellos, dar refugio a fugitivos y unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein. El Tribunal consintió al Sr. Muhana presentar una defensa, pero no le permitió llamar a testigos.

21. El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal declaró al Sr. Muhana culpable de dar refugio a fugitivos y lo condenó a un año de prisión, además de diez años de prisión por incitación al asesinato. El Sr. Muhana fue condenado a reclusión a perpetuidad, a una multa de 100.000 dinares y a la desnaturalización por haberse unido a la filial de Hizbulah en Bahrein. La sentencia fue confirmada en apelación, pero su condena por incitación se redujo de 10 a 5 años de prisión. El Sr. Muhana permanece detenido en la prisión de Jau, donde las autoridades se han negado a garantizar la atención médica necesaria por las heridas de bala que sufrió antes de ser detenido.

22. Mansoor Abdulwahed Hasan Mohamed al-Dolabi tiene 27 años. El Sr. Al-Dolabi está aquejado de quemaduras en las piernas sufridas en la infancia que limitan gravemente su movilidad, y de un tumor cerebral que le dificulta la visión. El Sr. Al-Dolabi fue detenido inicialmente en su domicilio el 17 de diciembre de 2017 por agentes de policía sin una orden judicial y sin que se le comunicara el motivo de su detención. Fue puesto en libertad al cabo de 18 días. El 9 de enero de 2018, el Sr. Al-Dolabi se dirigió a la Dirección de Investigaciones Penales para obtener los documentos relativos a su detención, que su empleador había solicitado para volver a contratarlo, y fue arrestado de nuevo sin una orden.

23. La fuente informa de que el Sr. Al-Dolabi estuvo detenido en la Dirección de Investigaciones Penales durante dos meses. Después del primer mes, fue transferido a la Fiscalía y luego al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff por cargos de posesión de un explosivo falso. Sin embargo, al llegar a Al-Hawd al-Jaff, no se le permitió bajar del autobús y fue devuelto a la Dirección de Investigaciones Penales, donde permaneció otros 27 días y fue presuntamente sometido a tortura. No fue llevado ante un fiscal ni un juez. Solo se le permitió recibir visitas tres meses después de su arresto. Durante su interrogatorio, el Sr. Al-Dolabi no fue interrogado sobre su pertenencia a Hizbulah. Fue engañado para confesar cuando declaró que era diseñador gráfico, ya que los funcionarios usaron esa información para decir que diseñaba barreras de hormigón para su uso por terroristas. Se le impidió contar con la asistencia de su abogado durante el interrogatorio y no se le permitió presentar ninguna prueba en su defensa. Después de 27 días en la Dirección, fue trasladado ante la Fiscalía, que lo acusó de haberse unido a la filial de Hizbulah en Bahrein. Tras su comparecencia, el Sr. Al-Dolabi fue trasladado al Centro de Detención de Al-Hawd al-Jaff.

24. El Sr. Al-Dolabi fue condenado a siete años de prisión y a su desnaturalización. Su abogado presentó denuncias ante el Ministerio del Interior, el Defensor del Pueblo y la Institución Nacional de Derechos Humanos en relación con las supuestas torturas y la falta de tratamiento de las afecciones médicas del Sr. Al-Dolabi. Se ordenó a la administración de la prisión que proporcionara medicación al Sr. Al-Dolabi. Su condena fue confirmada en apelación. El 15 de agosto de 2019, se trasladó al Sr. Al-Dolabi a un edificio de aislamiento debido a una reacción alérgica a un alimento. El 23 de agosto de 2019, o alrededor de esa

fecha, el Sr. Al-Dolabi fue puesto en régimen de aislamiento durante cuatro días, período durante el que estuvo encadenado todo el tiempo. Finalmente fue transferido a una sección de cuarentena. La prisión no trató su alergia y suspendió la medicación para su tumor. El 2 de septiembre de 2019, después de que un familiar enviara una carta, el Sr. Al-Dolabi volvió a su celda y recibió medicación.

25. Hasan Moosa Jaafar Mohamed Ali tiene 23 años, pero tenía 16 años cuando fue arrestado. El 5 de septiembre de 2012 tuvo lugar una redada en la casa de la familia del Sr. Ali. Los agentes no presentaron ninguna orden y solo dijeron que el Sr. Ali figuraba en una lista de fugitivos buscados. Después de ser perseguido por las autoridades durante más de un año, el Sr. Ali fue arrestado por primera vez el 23 de septiembre de 2013, mientras se encontraba en un coche con un familiar. La policía no le mostró la correspondiente orden de detención ni le explicó el motivo de esta.

26. La fuente informa de que el Sr. Ali fue llevado a la comisaría de Samaheej, cuyo personal lo torturó. Dos días después de su arresto, fue trasladado a la comisaría de policía de Al-Hadd, donde fue interrogado durante una semana. Fue en ese momento cuando le permitieron ponerse en contacto con sus familiares por primera vez. En fecha desconocida, el Sr. Ali fue acusado de reunión ilegal e incendio intencionado. El Tribunal lo condenó a un total de nueve años y medio de prisión y una multa de 200 dinares. El Sr. Ali no pudo contactar con su abogado y no dispuso de medios ni tiempo adecuados a fin de prepararse para el juicio. Tras ser condenado, el Sr. Ali fue transferido a la prisión de Jau. El 10 de marzo de 2015 tuvo lugar un motín en la prisión, durante el cual los guardias agredieron presuntamente a varios detenidos, incluido el Sr. Ali. Además, los funcionarios denegaron a los detenidos el permiso de utilizar los aseos y les cortaron el pelo a la fuerza. En mayo de 2015, los funcionarios trasladaron al Sr. Ali a la sección juvenil de la prisión de Jau. El 3 de junio de 2016, aproximadamente tres años después de su arresto, el Sr. Ali escapó y permaneció escondido cerca de dos años.

27. El 23 de enero de 2018, unos agentes vestidos de civil detuvieron al Sr. Ali en la casa de un familiar y lo llevaron a la Dirección de Investigaciones Penales. Se le acusó de fuga, de ocultarse para eludir su detención y de colaborar con la filial de Hizbulah en Bahrein. La fuente informa de que el Sr. Ali fue sometido a interrogatorios en la Dirección durante 45 días. No se permitió que su abogado estuviera presente durante los interrogatorios. Los funcionarios lo torturaron para forzar una confesión. Después de 45 días en la Dirección, fue transferido al edificio de aislamiento de la prisión de Jau. El tribunal condenó al Sr. Ali a 23 años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la desnaturalización. Durante el juicio se empleó su confesión en su contra. El Sr. Ali no pudo contactar con su abogado y no dispuso de medios ni tiempo adecuados a fin de prepararse para el juicio. Su condena fue confirmada en apelación.

28. El 15 de agosto de 2019, el Sr. Ali se unió a otros detenidos en una huelga de hambre para protestar por las malas condiciones de la prisión. Los huelguistas reivindicaban que se les sacara del edificio de aislamiento, que se les permitiera practicar su religión y que se levantaran las restricciones de llamadas telefónicas. En la primera semana de septiembre de 2019, la administración de la prisión prometió atender sus peticiones, pero una vez que la huelga terminó, se negó a cumplir las promesas. El Sr. Ali permanece en el edificio de aislamiento de la prisión de Jau.

Contexto

29. La fuente sostiene que los casos descritos demuestran un patrón de arrestos sin orden judicial y uso de la tortura para extraer confesiones. Las nueve personas mencionadas fueron sentenciadas el 16 de abril de 2019 en un juicio colectivo e injusto. Sus apelaciones fueron resueltas el 30 de junio de 2019, y todas ellas siguen detenidas en la prisión de Jau. Todas vieron restituida su nacionalidad por decreto real el 21 de abril de 2019.

Actuaciones judiciales

30. Según la fuente, los abogados de los acusados presentaron varios argumentos en su defensa, entre ellos la invalidez del testimonio de los testigos, la inexistencia de órdenes judiciales de detención o de registro y los métodos de tortura empleados para obtener

confesiones forzadas. Los abogados también argumentaron que el testimonio de otros acusados no era válido porque se había logrado mediante coacción. El Tribunal rechazó este argumento, al considerar que el testimonio dado por los agentes encargados de la detención era idéntico a las pruebas presentadas por el fiscal y otros testigos que fueron llamados a declarar. El Tribunal también rechazó los argumentos relativos a las detenciones y los registros sin orden judicial, y señaló que el testimonio de los testigos del fiscal era suficiente para confirmar la participación de los acusados en los delitos y que estos eran lo suficientemente graves como para investigar y detener a los acusados legalmente. El Tribunal no abordó la cuestión de que, con arreglo a la legislación de Bahrein, en particular su Constitución, las órdenes judiciales son un requisito.

31. Además, el Tribunal citó la ley de lucha contra el terrorismo de Bahrein¹, según la cual, si hay pruebas suficientes de que una persona ha sido acusada de un delito estipulado en la ley, los acusados serán detenidos por un período no superior a 28 días. Sin embargo, muchos de los acusados estuvieron detenidos más allá de ese plazo de 28 días y a menudo también fueron objeto de desaparición forzada. La fuente señala que el Comité de Derechos Humanos consideró que la definición de actos terroristas de la ley era demasiado amplia y vaga, y que podía penalizar la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación².

32. La fuente explica que el Tribunal desestimó las alegaciones de tortura porque no recibió ningún informe de lesiones de la unidad forense y las confesiones fueron idénticas a las pruebas presentadas por la fiscalía. El Tribunal también desestimó la retractación de las confesiones de los acusados como una estrategia para escapar del castigo. El Tribunal subrayó que los argumentos de la defensa carecían de sentido y no estaban respaldados por pruebas porque no había indicios de lesiones que demostraran que los acusados habían sido objeto de coacción física o psicológica. La fuente sostiene que la desestimación de las denuncias de tortura constituyó una infracción del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de las obligaciones de Bahrein en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que exigen una investigación completa de las denuncias de tortura y malos tratos.

Análisis de las vulneraciones cometidas

33. La fuente sostiene que los casos del Sr. Kadhém y el Sr. Ali recaen en la categoría II, debido a la violación de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica establecidos en los artículos 19 y 21 del Pacto.

34. Además, la fuente sostiene que los nueve casos recaen en la categoría III, ya que demuestran una práctica de detención y registro sin autorización, así como otras violaciones del derecho a un juicio justo. Ocho de las personas fueron sometidas a desaparición forzada durante distintos períodos de tiempo³. Todas ellas fueron objeto de juicios injustos, ya que se les impidió acceder a asesoramiento jurídico, fueron condenadas a partir de confesiones obtenidas mediante tortura y, en algunos casos, fueron condenadas en rebeldía en un juicio colectivo. Por lo tanto, la detención de las nueve personas es arbitraria y contraviene el artículo 9 del Pacto.

35. Según la fuente, el Sr. Al-Aali declaró que sus malos tratos y su detención se debieron posiblemente a su religión. En consecuencia, la detención del Sr. Al-Aali puede ser arbitraria con arreglo a la categoría V, ya que estuvo motivada por la discriminación en razón de su religión.

36. Por último, la fuente alega que la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades, incluidas las palizas, la denigración religiosa y las amenazas a familiares, violan las obligaciones de Bahrein en virtud del Pacto y de la Convención contra la Tortura. En particular, el uso de confesiones forzadas viola el artículo 15 de la Convención contra la Tortura. Asimismo, en virtud del artículo 208 del Código Penal de Bahrein, el uso de la

¹ Artículo 27 de la Ley núm. 58/2006 sobre la Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas, modificada por el Decreto Legislativo núm. 68/2014.

² CCPR/C/BHR/CO/1, párr. 29.

³ A/HRC/16/48/Add.3, párr. 21.

tortura para forzar una confesión es un delito. A pesar de ello, no se ha iniciado ninguna investigación sobre las denuncias de tortura en el presente caso y no se ha responsabilizado a los autores. Casi todos los casos de tortura dieron lugar a confesiones forzadas que fueron empleadas contra los acusados en el juicio.

Respuesta del Gobierno

37. El 8 de abril de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de conformidad con su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que antes del 8 de junio de 2020 proporcionara información detallada sobre la situación de las nueve personas. El Grupo pidió también al Gobierno que aclarase las disposiciones legales que justificaban que siguieran privadas de libertad, así como la compatibilidad de su reclusión con las obligaciones contraídas por Bahrein en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental de las nueve personas.

38. En su respuesta de 19 de mayo de 2020, el Gobierno proporcionó información en relación con las nueve personas que fueron enjuiciadas por su colaboración con la filial de Hizbulah en Bahrein.

39. El Sr. Khamis fue arrestado el 23 de enero de 2018 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein. Fue interrogado el 16 de febrero de 2018 y acusado de unirse a un grupo terrorista y financiarlo. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a 10 años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Khamis estaba presente con él. La unidad de investigaciones especiales y el Defensor del Pueblo no recibieron ninguna queja en relación con el Sr. Khamis. Su examen médico más reciente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 11 visitas de familiares.

40. El Sr. Al-Malki fue detenido en relación con otro caso después de que la Fiscalía recibiera una comunicación de las autoridades de seguridad que se ocupaban del caso de la filial de Hizbulah en Bahrein. Tras la detención y comparecencia del Sr. Al-Malki, fue acusado de unirse a un grupo terrorista. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a siete años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Al-Malki estaba presente con él. La causa se encuentra actualmente ante el Tribunal de Casación. A raíz de dos denuncias presentadas por un familiar al Defensor del Pueblo, el Sr. Al-Malki fue sometido a exámenes médicos y recibió tratamiento. La unidad de investigaciones especiales no recibió ninguna queja en relación con el Sr. Al-Malki. Su examen médico más reciente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 13 visitas de familiares.

41. El Sr. Al-Tarifi fue arrestado el 13 de diciembre de 2017 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein, e interrogado el 3 de enero de 2018. El Sr. Al-Tarifi fue acusado de unirse a un grupo terrorista y financiarlo; de la posesión y adquisición sin licencia de explosivos, armas y municiones para su utilización con el fin de perturbar la seguridad y lograr un propósito terrorista; y de entrenamiento en el uso de armas y explosivos para cometer actos terroristas. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a prisión perpetua, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Al-Tarifi estaba presente con él. La unidad de investigaciones especiales no recibió ninguna queja en relación con el Sr. Al-Tarifi. Se denegó una solicitud presentada al Defensor del Pueblo para recuperar los artículos incautados al Sr. Al-Tarifi. Su examen médico más reciente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 11 visitas de familiares.

42. El Sr. Al-Aali fue arrestado el 27 de enero de 2018 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein, interrogado el 16 de febrero de 2018 y acusado de unirse a un grupo terrorista. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a siete años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Al-Aali estaba presente con él. La unidad de investigaciones especiales y el Defensor del Pueblo no recibieron ninguna queja en relación con el Sr. Al-Aali. Su examen médico más reciente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 10 visitas de familiares.

43. El Sr. Fateel fue arrestado el 6 de febrero de 2018 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein e interrogado el 15 de febrero de 2018. Tras ello, se le acusó de unirse a un grupo terrorista; de la fabricación de explosivos para su utilización con el fin de perturbar la

seguridad y lograr un propósito terrorista; de entrenamiento en el uso de armas y explosivos para cometer actos terroristas; y de importar y poseer explosivos y armas sin licencia. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a prisión perpetua, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Fateel estaba presente con él. La unidad de investigaciones especiales y el Defensor del Pueblo no recibieron ninguna queja en relación con el Sr. Fateel. Su examen médico más reciente reveló problemas de visión, tras lo que se fijó una cita con un optometrista. Ha recibido 19 visitas de familiares.

44. El Sr. Kadhém fue detenido en relación con otro caso después de que la Fiscalía recibiera una comunicación de las autoridades de seguridad que se ocupaban del caso de la filial de Hizbulah en Bahrein. El Sr. Kadhém compareció durante su detención y fue interrogado el 30 de agosto de 2018. Tras ello, se le acusó de unirse a un grupo terrorista. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a prisión perpetua, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Kadhém estaba presente con él. La causa se encuentra actualmente ante el Tribunal de Casación. Se denegó una solicitud presentada al Defensor del Pueblo para recuperar los artículos incautados al Sr. Kadhém. La unidad de investigaciones especiales no recibió ninguna queja en relación con el Sr. Kadhém. No asistió a una cita médica reciente, pero su expediente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 14 visitas de familiares.

45. El Sr. Muhana fue arrestado el 13 de diciembre de 2017 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein e interrogado el 13 de enero de 2018. Tras ello, se le acusó de unirse a un grupo terrorista; de intento de asesinato con bombas; de organización de atentados con fines terroristas; de fabricación de explosivos sin licencia; de adquirir y poseer explosivos y armas para su utilización con el fin de perturbar la seguridad y lograr un propósito terrorista; de entrenamiento en el uso de armas y explosivos para cometer actos terroristas; y de destrucción de la propiedad pública. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a prisión perpetua, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Muhana estaba presente con él. A raíz de dos denuncias presentadas por un familiar al Defensor del Pueblo, el Sr. Muhana fue sometido a un examen médico por una antigua lesión de rodilla y otra dolencia, y recibió fisioterapia y tratamiento. La unidad de investigaciones especiales no recibió ninguna queja en relación con el Sr. Muhana. Su examen médico más reciente no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido 17 visitas de familiares.

46. El Sr. Al-Dolabi fue detenido en relación con otro caso después de que la Fiscalía recibiera una comunicación de las autoridades de seguridad que se ocupaban del caso de la filial de Hizbulah en Bahrein. El Sr. Kadhém compareció durante su detención y fue interrogado el 17 de febrero de 2018. Tras ello, se le acusó de unirse a un grupo terrorista. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a siete años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su ciudadanía. El abogado del Sr. Al-Dolabi estaba presente con él. La causa se encuentra actualmente ante el Tribunal de Casación. La unidad de investigaciones especiales recibió una denuncia del abogado del Sr. Al-Dolabi, en la que se afirmaba que había sido sometido a tortura por los agentes del orden para obtener una confesión. La unidad investigó la denuncia, entre otras cosas mediante entrevistas con el Sr. Al-Dolabi y las autoridades, la revisión de su expediente y la solicitud de exámenes médicos, que no revelaron lesiones ni síntomas psicológicos. La unidad archivó el caso por falta de pruebas. A raíz de una denuncia presentada por un familiar al Defensor del Pueblo, el Sr. Al-Dolabi fue sometido a varios exámenes médicos, tras lo que se permitió a su familia proporcionarle medicamentos. El examen médico más reciente del Sr. Al-Dolabi no reveló ninguna enfermedad. Ha recibido nueve visitas de familiares.

47. El Sr. Ali fue arrestado el 15 de enero de 2018 por unirse a la filial de Hizbulah en Bahrein e interrogado el 15 de febrero de 2018. Tras ello, se le acusó de unirse a un grupo terrorista; de tentativa de asesinato; de provocar una explosión con fines terroristas; de la fabricación de explosivos para su utilización con el fin de perturbar la seguridad y el orden público con un propósito terrorista; y de entrenarse y entrenar a otros en el uso de armas y explosivos para cometer actos terroristas. El 16 de abril de 2019, el Tribunal Penal Superior lo condenó a 10 años de prisión, a una multa de 100.000 dinares y a la revocación de su

ciudadanía. El abogado del Sr. Ali estaba presente con él. El Sr. Ali fue acusado en relación con otros casos.

48. La unidad de investigaciones especiales recibió una denuncia de la Institución Nacional de Derechos Humanos en relación con una presunta paliza propinada al Sr. Ali por agentes del orden público tras su detención en otro caso. La unidad de investigaciones especiales investigó la denuncia, entre otras cosas mediante entrevistas con el Sr. Ali y las autoridades y la solicitud de un examen médico, que no reveló ninguna lesión acorde con la denuncia. La unidad archivó el caso por falta de pruebas. A raíz de una nueva denuncia presentada por un familiar al Defensor del Pueblo en relación con supuestas palizas infligidas al Sr. Ali con candados de metal y su reclusión en régimen de aislamiento, se transfirieron los documentos pertinentes a la Fiscalía Militar. Otras quejas presentadas al Defensor del Pueblo dieron lugar a que el Sr. Ali fuera sometido a exámenes médicos y trasladado al Complejo Médico de Salmaniya, donde se programaron citas adicionales. El Sr. Ali ha recibido 11 visitas de familiares.

49. En relación con los nueve casos, el Tribunal Supremo de Apelaciones decidió el 30 de junio de 2019 restablecer la ciudadanía de cada una de las personas en cuestión, pero confirmó sus condenas.

50. El Gobierno concluye subrayando su atención al respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes de Bahrein y las obligaciones internacionales relativas a la detención, incluida la garantía del derecho a la dignidad en los centros de reforma y rehabilitación. En los centros de detención se garantiza la atención de la salud de todas las personas recluidas. El Gobierno confirma el compromiso de las autoridades de Bahrein de prevenir la tortura, y señala que existen mecanismos nacionales de reparación de agravios que investigan las denuncias de violación de los derechos de los detenidos. Entre ellos se encuentran la unidad de investigaciones especiales, el Defensor del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos de los Prisioneros y Detenidos y un juez que supervisa las sentencias. Estos mecanismos tienen potestad para investigar las denuncias de tortura.

Comentarios adicionales de la fuente

51. La fuente proporcionó nueva información sobre el caso, según la cual el 29 de junio de 2020, el Tribunal de Casación confirmó todas las sentencias de los acusados en relación con la filial de Hizbulah en Bahrein.

52. Además, la fuente sostiene que el Gobierno no respondió a varias alegaciones relativas a las detenciones sin orden judicial; la falta de representación letrada; la inobservancia de los procedimientos judiciales pertinentes; las desapariciones forzadas y la tortura; las condenas basadas en confesiones forzadas; los limitados contactos familiares; y la denegación de atención médica.

Deliberaciones

53. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada.

54. Para determinar si la privación de libertad de estas nueve personas es arbitraria, el Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las alegaciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

i. Categoría I

55. La fuente alega que las nueve personas fueron detenidas sin que mediara una orden judicial. Siete de ellas —el Sr. Khamis, el Sr. Al-Malki, el Sr. Al-Tarifi, el Sr. Al-Aali, el Sr. Fateel, el Sr. Al-Dolabi y el Sr. Ali— no fueron informados de los motivos de su detención en el momento de la misma (véase el anexo). La fuente también alega que algunas de las personas no fueron informadas con prontitud de los cargos que se les

imputaban. En particular, la fuente se refiere a los casos del Sr. Khamis y el Sr. Al-Malki, a quienes solo se les informó de los cargos que se les imputaban en el juicio, después de haber sido interrogados en relación con otros cargos. El Gobierno no ha respondido a ninguna de estas alegaciones.

56. Según el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El artículo 9, párrafo 2, establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. En el presente caso, se detuvo a nueve personas sin orden judicial, en violación del artículo 9, párrafo 1, del Pacto⁴. No se informó a siete de ellas de las razones de su detención⁵, mientras que no se informó sin demora a dos personas de las acusaciones formuladas contra ellas, en violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto. Al no presentar una orden de detención, no informar de las razones de la detención y no notificar sin demora la acusación, las autoridades no establecieron el fundamento jurídico de la detención de las nueve personas afectadas.

57. El Grupo de Trabajo ha constatado en casos recientes relativos a Bahrein que en el momento de la detención no se había presentado una orden de detención ni se habían expuesto las razones de la detención y que los cargos no se habían notificado sin demora, lo cual es indicio de que el incumplimiento de los procedimientos de detención es un problema sistémico⁶.

58. Además, la fuente alega que cuando cinco de las personas —el Sr. Khamis, el Sr. Al-Malki, el Sr. Al-Tarifi, el Sr. Fateel y el Sr. Muhana— fueron detenidas, se registraron sus hogares sin una orden de registro. El Gobierno no ha respondido a esta alegación. El Grupo de Trabajo ha determinado que la detención es arbitraria cuando las pruebas obtenidas sin un mandamiento de registro se utilizan en procedimientos judiciales⁷. Si bien el Gobierno reconoce en su respuesta que las solicitudes de recuperación de los objetos incautados al Sr. Al-Tarifi y al Sr. Kadhém fueron denegadas por la Fiscalía, no queda claro ni en la presentación de la fuente ni en la respuesta del Gobierno si las pruebas incautadas durante esos registros se utilizaron en el juicio contra las personas en cuestión. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede determinar si se produjo una violación adicional del artículo 9 del Pacto por el hecho de que no se presentara un mandamiento de registro. Sin embargo, el hecho de que se registraran algunos domicilios sin orden judicial refuerza la conclusión de que las autoridades no se atuvieron a los procedimientos de investigación velando por que la detención tuviera fundamento jurídico.

59. Además, de la información proporcionada por la fuente se desprende que las nueve personas no fueron llevadas rápidamente ante una autoridad judicial para impugnar la legalidad de su detención. Según la fuente, los retrasos en la presentación de cada acusado ante un tribunal se prolongaron al menos los siguientes plazos (y posiblemente más tiempo): Sr. Khamis: diez meses; Sr. Al-Malki: más de un año; Sr. Al-Tarifi: dos días; Sr. Al-Aali: 35 días; Sr. Fateel: seis semanas; Sr. Kadhém: dos días; Sr. Muhana: 40 días; Sr. Al-Dolabi: un mes y 27 días; y Sr. Ali: más de una semana, y 45 días. La fuente señala que el artículo 27 de la Ley núm. 58/2006 sobre la Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas permite mantener la detención durante 28 días cuando hay pruebas suficientes de que se ha cometido un delito. Sin embargo, en el presente caso, este período se superó

⁴ No basta con que exista una ley que permita la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo mediante una orden judicial. Véanse las opiniones núms. 46/2019, 33/2019, 9/2019, 46/2018 y 36/2018.

⁵ Una detención es arbitraria cuando se lleva a cabo sin informar a la persona detenida de los motivos de la misma. Véanse las opiniones núms. 46/2019, párr. 51; y 10/2015, párr. 34.

⁶ Opiniones núms. 5/2020, 73/2019, 59/2019, 31/2019, 79/2018, 51/2018, 55/2016 y 41/2015.

⁷ Opiniones núms. 33/2019, 31/2019, 83/2018, 78/2018 y 36/2018. Véanse también las opiniones núms. 5/2020 y 83/2019.

respecto a la mayoría de los acusados⁸. El Gobierno no puso remedio a las demoras en la presentación de cada acusado ante una autoridad judicial.

60. Según el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. Como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para cumplir el requisito de llevar a la persona detenida “sin demora” ante un juez después de su detención, y todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas⁹. En el presente caso, el Gobierno no cumplió con este requisito y no dio ninguna justificación de la demora. Además, se llevó a las personas ante la Fiscalía, que no puede considerarse una autoridad judicial a efectos del artículo 9, párrafo 3, del Pacto¹⁰. El retraso fue especialmente grave en el caso del Sr. Ali, que era menor de edad en el momento de su detención. El plazo a efectos de proceder sin demora es estricto en el caso de los menores, que deben ser llevados ante un tribunal en un plazo de 24 horas desde su detención¹¹. El hecho de que no se llevara al Sr. Ali rápidamente ante una autoridad judicial entraña una violación del apartado d) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

61. Además, la fuente alega que las personas citadas en el presente caso fueron objeto de desaparición forzada durante diversos períodos. El Gobierno no ha respondido a esta alegación. El Grupo de Trabajo no pudo encontrar información específica en la comunicación de la fuente que confirmara que todas las personas habían sido objeto de desaparición forzada. Sin embargo, parece que los casos del Sr. Khamis, el Sr. Al-Tarifi, el Sr. Fateel y el Sr. Ali constituyeron desapariciones, es decir, que dichas personas fueron privadas de su libertad contra su voluntad por funcionarios del Gobierno que se negaron a revelar su suerte y su paradero¹². Esas desapariciones forzadas son contrarias a los artículos 9 y 14 del Pacto y constituyen una forma particularmente agravada de detención arbitraria¹³. Las cuatro personas desaparecidas fueron también sustraídas del amparo de la ley, lo que contraviene el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto¹⁴. El Grupo de Trabajo remitirá el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

62. Además, la información proporcionada por la fuente indica que al menos ocho personas —todas menos el Sr. Kadhém— fueron mantenidas en régimen de incomunicación en las etapas iniciales de su detención, y ninguna de ellas parece haber podido impugnar la detención de conformidad con el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto. Como ha sostenido el Grupo de Trabajo, el mantenimiento de las personas en un régimen que las prive de acceso al mundo exterior, en particular a su familia y sus abogados, viola su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto¹⁵ y del artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹⁶ y resulta esencial para que la reclusión tenga fundamento jurídico. Puesto que las personas en cuestión fueron recluidas en régimen de incomunicación y no pudieron por tanto impugnar su privación de libertad, vieron también vulnerado su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

⁸ Incluso si el procedimiento se ajustó al derecho interno, el Grupo de Trabajo debe evaluar si se ajustó al derecho internacional de los derechos humanos. Véanse las opiniones núms. 5/2020, párr. 71; y 46/2019, párr. 50.

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 33.

¹⁰ *Ibid.*, párr. 32; opiniones núms. 5/2020, párr. 72; y 14/2015, párr. 28.

¹¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 33; opiniones núms. 5/2020, párr. 72; 73/2019, párr. 82; y 14/2015, párr. 29. Véase también Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24 (2019), relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, párr. 90.

¹² A/HRC/16/48/Add.3, párr. 21.

¹³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 17. Véanse también las opiniones núms. 11/2020, párr. 41; 6/2020, párr. 43; y 5/2020, párr. 74.

¹⁴ CCPR/C/BHR/CO/1, párrs. 35 y 36; opiniones núms. 5/2020, párrs. 73 y 74; y 59/2019, párr. 50.

¹⁵ Opiniones núms. 45/2019, 33/2019, 32/2019, 46/2017 y 45/2017.

¹⁶ A/HRC/30/37, párr. 3.

63. Por último, parece que las nueve personas fueron enjuiciadas en virtud de la Ley núm. 58/2006 sobre la Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas, en la que, según ha determinado el Comité de Derechos Humanos, figura una definición excesivamente amplia de terrorismo. El Grupo de Trabajo también ha señalado que las disposiciones son excesivamente vagas y amplias¹⁷. Su aplicación en este caso se suma a la conclusión del Grupo de Trabajo de que las detenciones no tenían fundamento jurídico.

64. El Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención de las nueve personas. Su privación de libertad se inscribe en la categoría I.

ii. Categoría II

65. La fuente sostiene que los casos del Sr. Kadhém y el Sr. Ali recaen en la categoría II, debido a la violación de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica establecidos en los artículos 19 y 21 del Pacto. En la comunicación parece argumentarse que la detención fue resultado de su presunta participación en una manifestación. En ambos casos, los cargos se referían a una reunión ilegal. Sin embargo, la fuente no aportó suficiente información en apoyo de su argumento, en particular por lo que se refiere a la ubicación y el contexto en que las dos personas en cuestión estaban ejerciendo sus derechos cuando fueron detenidas, las actividades en que tomaban parte en ese momento y las correspondientes motivaciones. Con la información de que disponía, el Grupo de Trabajo no pudo comprobar que se cumplieran los requisitos de la categoría II.

iii. Categoría III

66. La fuente alega que las nueve personas fueron sometidas a tortura y malos tratos, lo que dio lugar a una confesión forzada en al menos ocho de los casos (véase el anexo). Según la fuente, los métodos más comunes utilizados fueron las palizas físicas, la denigración religiosa y las amenazas a los familiares.

67. En su respuesta, el Gobierno se refiere a varias instituciones de Bahrein que investigan las denuncias de tortura. El Gobierno también señala que, en la mayoría de los casos individuales, ni la unidad de investigaciones especiales ni el Defensor del Pueblo recibieron ninguna denuncia de tortura, lo que parece indicar que no se produjo realmente ninguna tortura o maltrato. No obstante, el Gobierno sí se refiere a las denuncias de tortura presentadas a la unidad de investigaciones especiales en relación con el Sr. Al-Dolabi¹⁸ y el Sr. Ali, y señala que ambas fueron investigadas a fondo pero finalmente desestimadas debido a la falta de pruebas. En ambos casos, el Gobierno declaró que los exámenes médicos revelaron que las personas no mostraban signos de lesiones. El Grupo de Trabajo observa que algunos de los presuntos malos tratos (por ejemplo, la denigración religiosa y las amenazas) pueden no dejar una marca física. Además, no está claro si los exámenes médicos se realizaron con prontitud después de los actos de violencia que supuestamente tuvieron lugar, de modo que las posibles lesiones pueden no haber sido evidentes durante el examen¹⁹.

68. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que las nueve personas han sido objeto de torturas y malos tratos que dieron lugar a confesiones forzadas²⁰, lo que infringe la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, y el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto y los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura. Además, el Grupo de Trabajo recibió alegaciones creíbles de que el Sr. Ali había sido torturado en dos ocasiones, en contra de lo dispuesto en los apartados a) y c) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El ejercicio de la fuerza física y

¹⁷ CCPR/C/BHR/CO/1, párr. 29; opiniones núms. 5/2020, párr. 76; y 59/2019, párr. 60.

¹⁸ El Gobierno señala que en la denuncia se alega que el Sr. Al-Dolabi fue torturado para obtener una confesión.

¹⁹ Opiniones núms. 5/2020, párr. 79; y 53/2018, párr. 76; Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, párrs. 104 y 161.

²⁰ CAT/C/BHR/CO/2-3, párrs. 8, 16 y 17.

psicológica contra un niño supone un caso muy grave de abuso de poder²¹. Los presuntos casos de tortura y malos tratos deben ser objeto de una investigación exhaustiva e independiente al margen de las pesquisas mencionadas por el Gobierno.

69. La fuente alega que al menos ocho personas —todas excepto el Sr. Al-Malki— confesaron como resultado de la tortura (véase el anexo). Según la fuente, durante el juicio de los Sres. Khamis, Al-Aali, Fateel y Ali se utilizaron confesiones forzadas para obtener una condena. En su respuesta, el Gobierno confirma el compromiso de las autoridades de Bahrein de prevenir la tortura, pero no aborda directamente las supuestas confesiones forzadas.

70. El Grupo de Trabajo considera creíbles las alegaciones de la fuente respecto de las confesiones forzadas. El Gobierno pasa por alto la presunta falta de asesoramiento letrado durante la mayor parte de los interrogatorios en el curso de los cuales se obtuvieron las confesiones y observa en su respuesta que, al comparecer ante el tribunal, cada acusado estaba acompañado por un abogado, pero no menciona la fase de interrogatorio. Las confesiones hechas en ausencia de representación legal no son admisibles como prueba en los procedimientos penales²². Además, la admisión como prueba de una declaración presuntamente obtenida mediante tortura o malos tratos menoscaba la imparcialidad de todo el proceso, con independencia de que se disponga de otras pruebas que respalden la sentencia²³. Corresponde al Gobierno demostrar que las declaraciones se formularon libremente²⁴, pero no lo ha hecho.

71. En consecuencia, se vulneró el derecho de los afectados a la presunción de inocencia en virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto y, en el caso del Sr. Ali, del artículo 40, párrafo 2) b) i), de la Convención sobre los Derechos del Niño. También se vulneró su derecho a no ser obligados a confesarse culpables, reconocido en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto y en el artículo 40, párrafo 2 b) iv), de la Convención sobre los Derechos del Niño. El ejercicio intencionado de presión para obtener una confesión vulnera los artículos 2, 13, 15 y 16 de la Convención contra la Tortura²⁵. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

72. El Grupo de Trabajo toma nota de la alegación de la fuente, que no fue abordada por el Gobierno, de que el Cuarto Tribunal Penal Superior desestimó las alegaciones de la defensa relativas a la tortura y las confesiones forzadas por considerarlas “irrelevantes” al no existir informes de lesiones y ante el hecho de que las confesiones eran idénticas a las pruebas presentadas por la fiscalía. El Tribunal también desestimó la retractación de las confesiones de los acusados como una estrategia para escapar del castigo. El Grupo de Trabajo considera que el hecho de no intervenir cuando se han presentado denuncias de tortura equivale a una violación del derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto²⁶. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

73. Además, el 16 de abril de 2019, el Cuarto Tribunal Penal Superior condenó a las personas afectadas al término de un juicio colectivo contra 169 demandados. El Gobierno no intentó ofrecer ninguna justificación para iniciar un proceso judicial contra un número tan elevado de acusados. Como ha recalcado recientemente el Grupo de Trabajo, los juicios colectivos son incompatibles con los intereses de la justicia y no cumplen los requisitos de un juicio imparcial, en vista de que en el curso de esas actuaciones es imposible realizar una

²¹ Opiniones núms. 5/2020, párr. 80; 73/2019, párr. 90; y 3/2017, párr. 30.

²² Opiniones núms. 73/2019, párr. 91; 59/2019, párr. 70; 14/2019, párr. 71; 1/2014, párr. 22; y E/CN.4/2003/68, párr. 26 e). Véase también Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24, párr. 60.

²³ Opiniones núms. 73/2019, párr. 91; 59/2019, párr. 70; 32/2019, párr. 43; 52/2018, párr. 79 i); 34/2015, párr. 28; y 43/2012, párr. 51.

²⁴ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 41.

²⁵ CAT/C/BHR/CO/2-3, párr. 16.

²⁶ Opiniones núms. 32/2019, párr. 44; y 53/2018, párr. 77 b).

evaluación específica de la responsabilidad individual²⁷. El Grupo de Trabajo no está convencido de que fuera posible que todos los acusados en un juicio tan multitudinario recibieran una evaluación individualizada de su culpabilidad más allá de toda duda razonable, en violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

74. La fuente alega que se restringió el acceso de al menos ocho personas (todas menos el Sr. Kadhém) a representación letrada. Las presuntas restricciones consistieron en no permitir la presencia de abogados durante el interrogatorio y limitar las consultas de las personas con su abogado únicamente a determinados períodos antes del juicio o en su transcurso. El Gobierno declaró que los abogados estaban presentes durante el juicio, pero no mencionó el período de interrogatorios ni las limitaciones a la capacidad de consultar a los abogados durante las actuaciones. Toda persona privada de libertad tiene derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento de su detención, incluso inmediatamente después de su aprehensión²⁸. En este caso, las personas afectadas no tuvieron derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un abogado de su elección, en virtud del apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, ni a presentar una defensa efectiva, en virtud del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. También se violaron los derechos del Sr. Ali de pronto acceso a asistencia jurídica (artículo 37 d) de la Convención sobre los Derechos del Niño) y de asistencia jurídica en la preparación de su defensa y audiencia equitativa en presencia de asistencia jurídica (artículo 40, párrafo 2 b) ii) y iii) de la Convención).

75. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de las otras alegaciones de la fuente en relación con la violación del derecho de las personas afectadas a un juicio imparcial. Entre ellas figuran el ser juzgado en rebeldía (Sr. Kadhém), no poder impugnar o aportar pruebas (Sr. Khamis, Sr. Al-Aali y Sr. Muhana) y el uso de pruebas fabricadas (Sr. Fateel). Estas prácticas contribuyeron a que se produjeran procedimientos injustos, en violación de los párrafos 1 y 3 d) y e) del artículo 14 del Pacto. Habida cuenta de que esas denuncias se refieren a la independencia de los tribunales de Bahrein, el Grupo de Trabajo incluye esas cuestiones en la citada remisión de este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

76. La gravedad de esas vulneraciones del derecho a un juicio imparcial otorga a la privación de libertad de las nueve personas un carácter arbitrario y se inscribe en la categoría III.

iv. Categoría V

77. La fuente alega que el Sr. Al-Aali fue objeto de malos tratos y que posiblemente fue detenido por su religión. Según la fuente, el Sr. Al-Aali estuvo detenido en la Dirección de Investigaciones Criminales durante 35 días, en los que los funcionarios de la Dirección le golpearon en la cara, denigraron su religión y utilizaron calumnias para obtener una confesión forzada. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Muhana también fue presuntamente golpeado, insultado y sometido a denigración religiosa para forzar una confesión durante su interrogatorio en la Dirección. Además, se informa de que el Sr. Ali se unió a otros detenidos en una huelga de hambre en agosto de 2019 para exigir el derecho a practicar su religión. El Gobierno no ha respondido a ninguna de estas alegaciones.

78. Si bien en su comunicación la fuente indica que el Sr. Al-Aali, el Sr. Muhana y el Sr. Ali fueron sometidos a malos tratos y se les impidió practicar su religión, la información facilitada no indica que la religión fuera la razón o el motivo de su detención. Aunque la categoría V no es aplicable en el presente caso, el Grupo de Trabajo lo remitirá al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias.

²⁷ Opiniones núms. 5/2020, párr. 86; y 65/2019, párr. 75.

²⁸ A/HRC/30/37, anexo, principio 9 y directriz 8. Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 24, párr. 95 e). CRC/C/BHR/CO/4-6, párr. 44 b).

Observaciones finales

79. Preocupa al Grupo de Trabajo la salud física y psicológica de las nueve personas. Algunas presentan actualmente problemas de salud que necesitan tratamiento. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que libere de inmediato y sin condiciones a las nueve personas y se asegure de que reciban atención médica.

80. Según la fuente, las autoridades restringieron la capacidad de al menos ocho personas —todas excepto el Sr. Kadhém— de ponerse en contacto con sus familias al comienzo de su detención. El Gobierno indica el número de visitas de familiares que cada persona ha recibido, pero no hace referencia a la presunta falta de contacto con sus familias en la fase inicial de la detención. Estas limitaciones suponían una vulneración de los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y de las reglas 43, párrafo 3, y 58, párrafo 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Las limitaciones también vulneraron el derecho del Sr. Ali a mantenerse en contacto con su familia en virtud del artículo 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

81. Este es uno de los varios casos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de la libertad en Bahrein²⁹. En determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad que vulneren las normas de derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad³⁰.

82. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno en el marco de una visita al país. Dado que Bahrein es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, sería oportuno que el Gobierno extendiera una invitación al Grupo de Trabajo para visitar el país, y el Grupo de Trabajo confía en recibir una respuesta favorable a su petición.

Decisión

83. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Husain Ali Hasan Khamis, Qasim Ahmed Ali Hasan al-Malki, Jawad Redha Ahmed Abdulnabi Ahmed al-Tarifi, Ali Husain Ahmed Salman Ahmed al-Aali, Hasan Ali Abdulla Hasan Salman Fateel, Ahmed Mohamed Hasan Merza Hasan Kadhém, Husain Ali Mohsen Ali Muhana, Mansoor Abdulwahed Hasan Mohamed al-Dolabi y Hasan Moosa Jaafar Mohamed Ali es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, 9, 14 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I y III.

84. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Bahrein que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de esas nueve personas sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

85. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a las nueve personas inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, incluida la renovación de sus documentos identificativos como prueba del restablecimiento de su nacionalidad bahreiní y la supresión de sus antecedentes penales, de conformidad con el derecho internacional. En el actual contexto de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que esta plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la puesta en libertad inmediata de las nueve personas.

²⁹ Opiniones núms. 5/2020, 73/2019, 59/2019, 31/2019, 79/2018, 51/2018, 13/2018, 55/2016, 35/2016, 41/2015, 23/2015, 37/2014, 34/2014, 27/2014, 25/2014, 22/2014, 1/2014, 12/2013 y 6/2012.

³⁰ Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

86. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de las nueve personas y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

87. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y el Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias.

88. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

89. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a Husain Ali Hasan Khamis, Qasim Ahmed Ali Hasan al-Malki, Jawad Redha Ahmed Abdalnabi Ahmed al-Tarifi, Ali Husain Ahmed Salman Ahmed al-Aali, Hasan Ali Abdulla Hasan Salman Fateel, Ahmed Mohamed Hasan Merza Hasan Kadhem, Husain Ali Mohsen Ali Muhana, Mansoor Abdulwahed Hasan Mohamed al-Dolabi y Hasan Moosa Jaafar Mohamed Ali, y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se les han concedido indemnizaciones u otras reparaciones;

c) Si se ha investigado la violación de sus derechos y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Bahrein con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

90. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

91. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

92. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³¹.

[Aprobada el 25 de agosto de 2020]

³¹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.

Annex

<i>Defendant</i>	<i>Arrest warrant and reasons for arrest</i>	<i>Disappeared</i>	<i>Contact with family</i>	<i>Access to lawyer</i>	<i>Torture or ill-treatment</i>	<i>Forced confession</i>	<i>Tried in absentia</i>	<i>Sentence</i>
1 Mr. Khamis	No arrest or search warrant; no reasons given.	Disappeared for three days initially and then 42 days.	Initial brief call to family three days after arrest contact with family 40 days after arrest.	Denied access to his lawyer during interrogation.	Yes, threats against his family; blindfolded for 42 days.	Yes, confession used at trial.	No	Ten years; fine of 100,000 dinars, and denaturalised (joining the Bahraini Hezbollah).
2 Mr. Al-Malki	No arrest or search warrant; no reasons given.	Unspecified	Initial call to family; family visit nearly a month after arrest.	Denied access to his lawyer.	Yes, since his arrest at the CID.	Unspecified, but a statement was obtained from an unknown person.	No	Seven years; denaturalised (participating in the establishment of the Bahraini Hezbollah and joining a terrorist cell).
3 Mr. Al-Tarifi	No arrest or search warrant; no reasons given.	Disappeared for two days.	Initial brief call to his family after disappearance for two days; prevented from further visits.	Denied access to his lawyer during interrogation and prior to trial.	Yes	Yes	No	Life imprisonment; fine of 100,000 dinars, and denaturalised (joining the Bahraini Hezbollah, supporting and funding terrorist activities, training in weapons and explosives, possessing explosives, firearms, ammunition and Molotov cocktails).
4 Mr. Al-Aali	No arrest warrant; no reasons given.	Unspecified, but initially detained at CID for 35 days.	Brief call after arrest; family visits only allowed at prison.	Denied access to his lawyer during interrogation; limited access to his lawyer prior to and during trial.	Yes, subjected at the CID to beatings on the face, religious denigration and slurs.	Yes, confession used at trial.	No	Seven years; denaturalised (involvement with the Bahraini Hezbollah).

<i>Defendant</i>	<i>Arrest warrant and reasons for arrest</i>	<i>Disappeared</i>	<i>Contact with family</i>	<i>Access to lawyer</i>	<i>Torture or ill-treatment</i>	<i>Forced confession</i>	<i>Tried in absentia</i>	<i>Sentence</i>
5 Mr. Fateel	No arrest or search warrant; no reasons given.	Disappeared for six weeks.	Allowed a brief call to family late one night; allowed to call family when transferred to New Dry Dock.	Denied access to his lawyer while at the CID.	Yes, beaten on “sensitive areas” while questioned about the names of his family members for two hours.	Yes, coerced confessions and photographed with unknown equipment. Used at trial.	No	Life imprisonment; fine of 100,000 dinars, and denaturalised (joining the Bahraini Hezbollah, funding the organisation and possessing illegal materials).
6 Mr. Kadhem	No arrest warrant.	Unspecified	Unspecified	Unspecified	Yes, subjected at the CID to two days of ill-treatment, beating, threatening with electric shocks.	Yes	Yes, second trial was in absentia (detained on the bus during the proceedings).	Three years (arson, rioting in an illegal assembly, and manufacturing and processing Molotov cocktails). Seven years; denaturalised (belonging to the Bahraini Hezbollah).
7 Mr. Muhana	No arrest or search warrant.	Unspecified, but initially detained at the CID for 40 days.	Brief call to family after arrest.	Denied access to his lawyer during interrogation.	Yes, subjected at the CID to beating, insults and religious denigration.	Yes	No	One year (harbouring fugitives). Ten years (incitement to murder), subsequently reduced on appeal to five years. Life imprisonment, fine of 100,000 dinars, and denaturalised (joining the Bahraini Hezbollah).

<i>Defendant</i>	<i>Arrest warrant and reasons for arrest</i>	<i>Disappeared</i>	<i>Contact with family</i>	<i>Access to lawyer</i>	<i>Torture or ill-treatment</i>	<i>Forced confession</i>	<i>Tried in absentia</i>	<i>Sentence</i>
8 Mr. Al-Dolabi	Arrested on two occasions without a warrant; no reasons given.	Unspecified, but initially held at the CID for two months, and then for a further 27 days.	Brief calls; allowed to receive visits three months after arrest.	Denied access to his lawyer during interrogation.	Yes, subjected at the CID to forced nudity, forced standing (which causes severe pain due to burns on his legs), and beatings over the head.	Yes (tricked into confessing).	No	Seven years; denaturalised (membership of the Bahraini Hezbollah).
9 Mr. Ali (minor at time of arrest)	No arrest warrant; no reasons given (first proceedings).	Disappeared for two days after first arrest and was transferred to a police station where he was interrogated for a week. In second proceedings, interrogated at the CID for 45 days.	Allowed to contact his family after being interrogated for a week.	Denied access to his lawyer during interrogation for both proceedings and in preparation for the second trial.	Yes, subjected at a police station to burning of the soles of his feet and thighs, beatings on the head, abdomen and “sensitive areas”. Tortured again following his second arrest.	Yes, confession used at second trial.	No	Nine and a half years; fine of 200 dinars (illegal assembly and arson). Sentenced to a total of 23 years, fine of 100,000 dinars and denaturalised (prison break, hiding from arrest and participation in the Bahraini Hezbollah).